

C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que el Ministerio Público solicitó la extradición del imputado Carlos Enrique Rojas Merino, cédula nacional de identidad N° 13.912.431-6, de nacionalidad chilena, en atención a que en causa RUC N° 1700614362-8, en audiencia celebrada el tres del mes en curso, ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, ha sido formalizado en ausencia como autor del delito de abuso sexual de menor de catorce años en perjuicio de I.A.S.R., cometido en la comuna de Maipú, ciudad de Santiago, el dos de julio de dos mil diecisiete.

Segundo: Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 432 del Código Procesal Penal, como condición previa para determinar la procedencia de la extradición de un imputado, atañe al Juez de Garantía examinar la concurrencia de los requisitos que prevé el artículo 140 del mismo cuerpo legal. En la especie, en la audiencia antes señalada, en ausencia del imputado, pero debidamente representado por defensora letrada, el Ministerio Público solicitó que se cursara pedido de extradición a su respecto y, tras el correspondiente debate, se accedió a tal petición, por estimar que concurrían los presupuestos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal. De esta forma, por sentencia del tribunal antes indicado de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, se ordenó remitir los antecedentes a esta Corte para que se tramitara la solicitud de extradición activa respecto del imputado antes individualizado, estimando que se reúnen en la especie los presupuestos previstos en los artículos 431 y 432 del Código Procesal Penal.



Tercero: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 431 del Código Procesal Penal, la extradición activa, esto es, el requerimiento a un país extranjero para la entrega a la jurisdicción nacional de una persona que se encuentra en su territorio, procede sólo cuando se ha formalizado investigación por un delito que tiene asignada en la ley chilena una pena privativa de libertad cuya duración mínima exceda de un año, y siempre que en el procedimiento conste el país y lugar específico en que dicho imputado se halle actualmente.

Cuarto: Que respecto del primer requisito, como ya se ha reseñado, el imputado Carlos Enrique Rojas Merino, cédula nacional de identidad N° 13.912.431-6, ha sido formalizado en ausencia, como autor del delito de abuso sexual de menor de catorce años, en perjuicio de la menor de iniciales I.A.S.R., cometido en la comuna de Maipú, ciudad de Santiago, el dos de julio de dos mil diecisiete, ilícito que en nuestra legislación tiene asignada la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo -artículo 366 bis del Código Penal-, esto es, de tres años y un día a diez años.

Quinto: Que, en cuanto al segundo de los requisitos, de acuerdo con los antecedentes aportados al proceso, se tiene conocimiento que el imputado salió del territorio nacional el quince de marzo de dos mil diecinueve hacia la República Argentina, y que al veintiocho de abril de dos mil veinte tenía su domicilio en calle Francisco Álvarez 1058, Dorrego, Mendoza, Argentina.

Sexto: Que con fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se realizó ante esta Corte la audiencia que ordena el artículo 433 del Código Procesal Penal, con la asistencia de los letrados representantes del Ministerio Público, de la parte querellante y de la defensa, quienes efectuaron peticiones acordes a sus intereses procesales.



Séptimo: Que, asimismo, se debe señalar que entre Chile y Argentina no existe un tratado o convenio bilateral en materia de extradición, pero ambas repúblicas han suscrito la Convención de Extradición de Montevideo de veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y tres, la que fue ratificada por Chile el dos de febrero de mil novecientos treinta y cinco y por la Argentina el diecinueve de abril de mil novecientos cincuenta y seis, que en su artículo I refiere que “ Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones del presente tratado, a cualquiera de los otros estados que los requiere, los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurren las circunstancias siguientes: a) Que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado; b) Que el hecho por el cual se reclama la extradición, tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requirente y por las del Estado requerido, con la pena mínima de un año de privación de la libertad”.

Sin perjuicio de lo anterior, ambos Estados son parte del “Acuerdo Sobre Extradición Entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile”, contenido en el Decreto N° 35 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el N° 1 de su artículo 2 señala “Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años”.

Por su parte, el artículo 119 del Código Penal argentino establece, en aquella parte que interesa para estos fines:



“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

“La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”.

“La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”.

Debe consignarse que la menor ofendida, de iniciales I.A.S.R., nació el diecisiete de marzo de dos mil diez, de modo que a la fecha de comisión del ilícito que se le imputa a Rojas Merino, aquella tenía siete años, tres meses y quince días de edad.

Octavo: Que, en definitiva, el delito imputado a Rojas Merino tiene la gravedad que los mencionados Convenios prevén; está tipificado en ambas legislaciones, la chilena y la argentina; es actualmente perseguible de oficio conforme a los dos ordenamientos jurídicos; y se trata de un delito común y no político.

Noveno: Que la defensa del imputado ha entregado dos razones para que se declare la improcedencia de la extradición, y ninguna de ellas será atendida por esta Corte. En efecto:



a) Se ha dicho que el domicilio del imputado aportado en el proceso, en calle Francisco Álvarez 1058, Dorrego, Mendoza, Argentina, no cumple con la exigencia del inciso final del artículo 432 del Código Procesal Penal, el que señala que “Para que el juez eleve los antecedentes a la Corte de Apelaciones, será necesario que conste en el procedimiento el país y lugar en que el imputado se encontrare **en la actualidad**”, pues las últimas noticias que se tuvieron sobre el domicilio referido datan del veintiocho de abril de dos mil veinte. Parece a esta Corte, en cambio, que es perfectamente lógico concluir que el imputado se encuentra “en la actualidad” en el inmueble mencionado, pues para estos efectos de índole procesal penal, el “tiempo presente” -que así está definida la palabra “actualidad” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un lapso más o menos amplio que en cada caso habrá de darle contenido, pero que, desde luego, en la especie, abarca lo sucedido hace dos años. Luego, si en abril de dos mil veinte se tenía cierta certeza respecto al hecho que Carlos Enrique Rojas Merino vivía en calle Francisco Álvarez 1058, Dorrego, Mendoza, Argentina, habrá que concluir que esa “cierta certeza” se la tiene en la actualidad, de modo que, a la data de esta sentencia, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se conoce el lugar donde el imputado se encuentra y, por lo mismo, se cumple con la exigencia legal anotada.

b) Se ha hecho caudal acerca de la circunstancia consistente en que el artículo 119 del Código Penal argentino contempla como pena mínima para el ilícito allí tipificado, y que describe la conducta desplegada por el imputado, la de seis meses, en circunstancias que el mencionado Acuerdo contenido en el Decreto N° 35 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores exige una pena de dos años. Sin embargo, la pena que contempla el inciso primero del artículo 119 citado no es una de “seis meses de prisión” sino una que va de seis



meses a cuatro años de prisión, de modo que dicha sanción cumple con la exigencia del instrumento internacional citado. Por lo demás, la descripción de la conducta por la cual fue formalizado el imputado, según se consignó en la audiencia del dieciséis de mayo de dos mil veintidós ante esta Corte, contempla el hecho que este introdujo sus dedos en la vagina de la niña, actividad que, de acuerdo al inciso tercero del tantas veces referido artículo 119 del Código Penal de la República Argentina, lleva aparejada la sanción de seis a diez años de prisión.

Décimo: Que, en los términos precedentemente expuestos, habiéndose cumplido con las exigencias internas y externas establecidas para la concurrencia de la institución de la extradición, cabe concluir que el pedido de extradición en contra del requerido en los autos RUC N° 1700614362-8-1, resulta procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 431 al 436, todos del Código Procesal Penal, se declara:

Que **se acoge** la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público respecto de Carlos Enrique Rojas Merino, de nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad 13.912.431-6, por la responsabilidad que se le atribuye en el delito de abuso sexual de menor de catorce años en perjuicio de la niña de iniciales I.A.S.R., cometido en la comuna de Maipú, ciudad de Santiago, el dos de julio de dos mil diecisiete.

Para el cumplimiento de lo resuelto, diríjase oficio a la señora ministro de Relaciones Exteriores con el fin que se sirva ordenar la práctica de las gestiones diplomáticas necesarias, encaminadas a ese objetivo.



Del mismo modo, diríjase oficio a la misma señora ministro para que, conforme al artículo 434 del Código Procesal Penal, pida a las autoridades correspondientes de la República Argentina que ordenen la detención previa de Carlos Enrique Rojas Merino o adopten otra medida destinada a evitar su fuga.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 436 del Código Procesal Penal, adjúntese a la correspondiente comunicación, los siguientes anexos:

1. Una copia íntegra de estos autos, ingreso de Corte N° 1879-2022.

2. Una copia íntegra de la carpeta investigativa del Ministerio Público que motivara la formalización de investigación en contra del requerido.

3. Una transcripción de la audiencia de formalización y de solicitud de extradición, y copia del acta de audiencia verificada en esta Corte y de la presente resolución, conforme al artículo 433 del Código Procesal Penal.

4. Una copia de las disposiciones legales que regulan el delito materia de este pedido de extradición, de las que definen la participación del imputado, precisan la sanción y establecen normas sobre prescripción, así como de las normas relativas a la jurisdicción de los tribunales chilenos; sin perjuicio de todas aquellas normas legales chilenas citadas en este fallo, con atestado de su vigencia.

Regístrese y despáchese el oficio respectivo con todos sus antecedentes, notifíquese por el estado diario. Sin perjuicio de ello, remítase por la señora secretaria de esta Corte copia de esta resolución vía correo electrónico a la Fiscalía Regional del Ministerio



Público, a la parte querellante y al señor Defensor Regional de Santiago.

Comuníquese.

Redacción del ministro señor Mera.

N°Penal-1879-2022.

Pronunciada por la Quinta Sala, integrada por los Ministros señor Juan Cristobal Mera Muñoz, señora Maria Soledad Melo Labra y el Abogado Integrante señor Jorge Benitez Urrutia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Maria Soledad Melo L. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>